

La vanguardia de la globalización: neoliberalismo y violencia en la zona bananera de Colombia

Avi Chomsky

Profesora. Salem State College, Estados Unidos.

A mediados de los años 80, cuarenta familias afiliadas a Sintagro, un sindicato radical acusado de vínculos con la guerrilla Ejército Popular de Liberación (EPL), invadieron 180 hectáreas de la finca bananera Honduras, en la región de Urabá, en el norte de Colombia. Las «invasiones» de tierras —realizadas de manera pacífica por civiles no armados—, se han convertido en una práctica común en América Latina, donde, durante generaciones, los campesinos han tenido que enfrentarse a arriendos precarios y al desahucio. Un grupo organizado se muda a un área escogida y, sin autorización legal, comienza a establecer una comunidad y una finca. Durante varios años, los campesinos de Honduras hicieron lo mismo. Construyeron hogares y cultivaron bananos.

El 24 de febrero de 1988 miembros del Batallón Voltígeros llegaron a Honduras y a otras dos fincas y amenazaron con asesinar trabajadores para evitar que votaran en las elecciones del 13 de marzo. Les ordenaron que abandonaran el área y arrestaron a cuatro personas, incluyendo una muchacha de dieciséis años. Bajo amenazas, y quizás torturas, los arrestados fueron obligados a identificar a algunos trabajadores como

pertenecientes al EPL. Entre los interrogadores se encontraban dos antiguos miembros del EPL, quienes los acusaron de pertenecer a la organización y los incitaron a que desertaran.

El 2 de marzo tropas del Batallón detuvieron y golpearon a seis trabajadores en las cercanías de la finca La Zumbadora; asimismo, advirtieron a los otros de que no votaran por Unión Patriótica (UP), un partido izquierdista formado por miembros desmovilizados de otro movimiento guerrillero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El capitán informó a los trabajadores que enviaría a alguien para que los matara. Dos días después, hombres armados vestidos de civil llegaron a la finca Honduras, durante la noche, y llamaron por sus nombres a diecisiete trabajadores, los obligaron a salir y los mataron. Continuaron hasta la finca vecina, La Negra, y mataron a otros tres trabajadores. Todos los muertos eran miembros activos del sindicato Sintagro.

El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia investigó el caso y reportó en abril de 1988 que «el Ejército de Colombia había empleado a ex guerrilleros desertores del EPL como guías,

integrándolos a sus patrullas, para la ubicación, identificación y eliminación de los presuntos subversivos y también, con el mismo propósito, empleó a sicarios (paramilitares) financiados por la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM)». Además, detectó que las tropas paramilitares involucradas tenían su base en una finca en Boyacá perteneciente al dirigente paramilitar Fidel Castaño.

En septiembre de 1988, la jueza que investigaba el caso, Martha Lucía González, fue obligada a exiliarse después de repetidas amenazas de muerte. En julio de 1989, su padre fue asesinado en una aparente represalia, como también María Elena Díaz, la jueza que se encargó del caso después de González. Durante el proceso de apelación, el capitán, el lugarteniente coronel y el cabo que dirigieron a los asesinos fueron ascendidos. Finalmente, en abril de 1993 el nuevo Fiscal General Asistente de las Fuerzas Armadas revocó todas las decisiones previas contra los soldados y cerró el caso.

La vanguardia de la globalización

La historia de la masacre en la finca Honduras revela un número importante de características del rostro de la globalización en América Latina. La región de Urabá, en el norte de Colombia, a finales de los años 80 y en los 90, fue una tierra donde las fuerzas paramilitares privadas trabajaban abiertamente con el gobierno, y ambos al servicio de los terratenientes; sin más ley que la violencia, sin más gobierno que el de las distintas partes armadas y sin más alternativa que trabajar en las plantaciones bananeras. Cada intento de cambio social era acusado de delito y la sentencia de muerte llegaba sin previo aviso y sin juicio, y los que ejercían la violencia operaban con absoluta impunidad. Una mujer trató de explicar su decisión de hacer las paces con los paramilitares después de que asesinaran a su padre cortándole el cuello de oreja a oreja, abriéndole el pecho con un machete, sacándole los intestinos y cortándole los testículos: «La única manera en que puedes protegerte es viviendo con ellos y aceptándolos».¹

Aunque en Urabá la violencia puede parecer sin sentido, en realidad sigue una clave lógica político-económica: despejó el área para permitir a los ganaderos y a los cultivadores de banano establecerse en la zona; en las regiones vecinas expulsó a otros a Urabá, donde, al no tener acceso a las tierras, fueron a trabajar para las plantaciones bananeras bajo condiciones horribles. La represión fue la respuesta a sus primeros intentos de organizar sindicatos. Dos movimientos armados hallaron aliados entre los trabajadores, y la violencia se incrementó a medida que el ejército y los

paramilitares colaboraron para aplastar toda forma de protesta social. Los campesinos usurpadores de las fincas Honduras y La Negra eran solo unos pocos entre los cientos que fueron asesinados en el proceso para imponer un orden neoliberal en Urabá. La violencia en la región es solo uno de los rostros de la globalización.

En toda América Latina (como en cualquier parte del Tercer mundo) la globalización contemporánea ha sido asociada con políticas económicas neoliberales y programas de ajuste estructural —impuestos por las instituciones financieras internacionales— y con el abandono de las políticas proteccionistas, populistas y redistributivas de mediados del siglo xx. La globalización ha representado un énfasis en la integración a la economía mundial, al acoger favorablemente las inversiones extranjeras, aumentar las exportaciones y reducir los programas de bienestar social que dependen del Estado.

Para los trabajadores norteamericanos, la globalización ha significado el cierre de fábricas y la pérdida de empleos a medida que las compañías concluían sus negocios y se iban al extranjero en busca de trabajadores más baratos, de impuestos más bajos y de menos reglas y obligaciones. El proyecto neoliberal ha creado y reforzado estas condiciones en América Latina, con amplio respaldo militar norteamericano —cuando ha sido necesario— para responder a la oposición popular.

Los manufactureros que han permanecido en los Estados Unidos han utilizado la existencia de mano de obra barata en otras regiones, para reforzar la disciplina en casa. Tanto en el Tercer como en el Primer mundos, con frecuencia los sindicatos se enfrentan, directa o indirectamente, a amenazas por parte de la administración, de cerrar fábricas para buscar en otras partes empleados más baratos y dóciles si los trabajadores se niegan a acceder a sus demandas. Los gobiernos, por su parte, se enfrentan al mismo rompecabezas: si intentan elevar los impuestos, aumentar las regulaciones para los inversionistas extranjeros, aprobar medidas para proteger a los trabajadores o al medio ambiente, los inversionistas amenazan con marcharse. En América Latina, los pobres han sido las primeras víctimas de las políticas neoliberales a medida que las reformas agrarias han sido bloqueadas, los precios subidos, los salarios bajados, los subsidios cortados, y el acceso a la alimentación, la salud y la educación básica debilitado. La resistencia también ha aumentado entre algunos grupos sociales como los estudiantes, los intelectuales, los periodistas y los artistas, opuestos a lo que consideran la venta de su país a las empresas extranjeras. El modelo neoliberal ha engendrado protestas en todos los lugares donde se ha implementado. Cuando los derechos de

los pobres a sobrevivir se han subordinado a los del capital foráneo, a hacer ganancias, los pobres se han rebelado. Han organizado asociaciones campesinas para ejercer presión y lograr reformas agrarias y organizado sindicatos para luchar por sus derechos como trabajadores. Cuando los mecanismos legales han fallado, a menudo han recurrido a procedimientos más militantes, a veces extra legales (pero pacíficos), como las invasiones de tierras y las huelgas. Y cuando las protestas pacíficas recibieron represiones violentas, algunos se pasaron a la resistencia armada. Urabá ha asistido a todos estos fenómenos desde los años 60.

Colombia es el primer país del hemisferio —y en algunos casos del mundo— en violaciones de los derechos humanos, escuadrones de la muerte, masacres, desplazamientos forzados, y asesinatos de sindicalistas y activistas pro derechos humanos. No es una coincidencia que también sea el primer país del hemisferio en recibir ayuda de los Estados Unidos. Muchos otros países latinoamericanos se han movido a la izquierda en las elecciones de los años 90 y a principios del actual siglo, y han suavizado o revertido sus propios experimentos neoliberales de los años 70 y los 80. Colombia, sin embargo, sigue siendo la vanguardia del neoliberalismo contemporáneo. La trayectoria de los sucesos en Urabá ejemplifica lo que este proceso significa para la gente común.

Usando la violencia para establecer una zona bananera: Urabá (1945-1960)

Ubicada en la parte oeste de Antioquia, la región de Urabá contenía una pequeña población —constituida fundamentalmente por inmigrantes afro-colombianos procedentes de la costa del Caribe—, con limitada autoridad gubernamental cuando *la violencia* estalló en los años 40.² La pequeña población se contrajo aún más a medida que los habitantes huían, perseguidos por los paramilitares. Hacia 1953, la región estaba esencialmente en manos de los paramilitares.³

La Frutera de Sevilla, de la United Fruit Company (UFCO), comenzó a desplazar sus operaciones de Santa Marta a Urabá a inicios de los años 60. La compañía extendió créditos y préstamos a los inversionistas colombianos a condición de que adquirieran y legalizaran las tierras, y cumplieran los requerimientos de la compañía en cuanto a reparaciones, drenaje, carreteras, etc. En general, los campesinos que sembraban las tierras sin título legal las perdieron durante este proceso; y las pequeñas fincas bananeras fueron absorbidas gradualmente por las más grandes durante los años 70 y los 80.

La empleomanía de la industria bananera atrajo una nueva oleada de inmigrantes, fundamentalmente de la vecina provincia de Chocó, donde predominan los afro-colombianos. En 1984, Urabá producía 92% de las exportaciones de bananos de Colombia, y el país se había convertido en uno de los cuatro más grandes exportadores de este producto a nivel mundial. Con la expansión de la industria bananera llegaron, a finales de los años 70, el ejército, los sindicatos radicales y las organizaciones campesinas, las guerrillas y, a mediados de los 80, una nueva generación de paramilitares.

En 1995, Urabá tenía una población de 350 000 habitantes, con 29 000 hectáreas sembradas de bananos en 409 fincas. Un total de 16 000 personas trabajaban en esas fincas, muchas de estas inmigrantes, veteranos de las luchas campesinas y armadas de los años 50 y los 60. Las condiciones de las plantaciones bananeras en esas décadas se consideraban horribles. Dos tercios de los trabajadores eran afro-colombianos que antes habían sido campesinos, pequeños mineros y pescadores. La jornada laboral duraba entre dieciocho y veinte horas; los trabajadores vivían en campamentos propiedad de la compañía, sin agua ni electricidad, durmiendo a veces en cajas de cartón. En los años 60, 72% de los peones vivía en estos campamentos; en 1979, constituían 89%. Aún en 1979, muy pocas de estas barracas tenían agua corriente, electricidad o letrinas. Prácticamente no existían zonas urbanas, y las viviendas y servicios públicos eran escasos. Las condiciones de las viviendas en Apartadó eran peores que en las plantaciones en ese año; incluso en 1993 solo 31% de sus casas tenía acceso al agua corriente. Sin embargo, debido en parte a la violencia en las plantaciones, para 1987, 75% de los trabajadores bananeros de Urabá se trasladó a las zonas urbanas.⁴

Las élites colombianas comenzaron a invertir en la producción bananera en Urabá, estimuladas por la UFCO, que prefería que los contratistas privados se encargaran de los asuntos laborales y corrieran los riesgos por pérdidas debidas al estado del tiempo y a las enfermedades. En 1969, cuando expiró sus primeros contratos con la compañía, los contratistas crearon la Asociación de Cultivadores Bananeros de Urabá (Augura). Los miembros de Augura, afiliados al Partido Liberal, dominaron la política de la región hasta finales de los años 80.

Los primeros sindicatos de Urabá

El primer sindicato, Sintrabanano, fue fundado en 1964 por trabajadores de la United Fruit y simpatizantes del Partido Comunista. La compañía despidió inmediatamente a los trabajadores que se habían

organizado y logró que fueran encarcelados junto con los líderes comunistas de la región. Un segundo sindicato, Sintagro, fue fundado en 1972 y se afilió a la Federación Nacional Católica, pero a pesar de que se trataba de un sindicato muy moderado, la respuesta fue la militarización de la finca y el exilio para su presidente y fiscal cuando el sindicato presentó su primera propuesta de negociaciones en 1976. En esta ocasión, un nuevo factor entró a formar parte de la ecuación: el pequeño movimiento guerrillero del EPL respondió con el asesinato del director de Relaciones Industriales de la compañía.

Durante los años 70, la militarización, los asesinatos y la exigencia de llegar a «pactos colectivos» entre los propietarios y los trabajadores, con exclusión de los sindicatos, fue la respuesta a los repetidos esfuerzos por crear organizaciones en las plantaciones bananeras. Los despidos y los asesinatos continuaron ante cada intento de organización sindical.

Para 1980, Sintagro se había convertido en un objetivo constante de la violencia oficial y paramilitar. Un abogado que asistió legalmente a Sintagro escribió que en 1980 «comenzó a recibir citaciones, hostigamientos y retenciones temporales por parte del batallón militar Voltígeros. Las retenciones arbitrarias de los trabajadores se hicieron habituales, así como la presencia de los militares en las reuniones sindicales». Unos soldados capturaron a los asistentes a una reunión, en diciembre de 1981, se llevaron a varios trabajadores a los cuarteles del Batallón Voltígeros y los torturaron. A pesar de las crecientes amenazas, los asedios y los asesinatos a mediados de los años 80, Sintagro continuó negociando y firmando acuerdos con las compañías bananeras.⁵

¿Dónde estaba el Estado?

Según algunos análisis, lo que faltaba en Urabá era la presencia del Estado. Las áreas urbanas fueron creadas por una serie de invasiones y asentamientos usurpadores; los servicios públicos virtualmente no existían. La ausencia o presencia selectiva del Estado tuvo sus ventajas para la asociación de cultivadores bananeros Augura: impuestos bajos o no cobrados, ausencia de control ambiental y créditos subsidiados.⁶ En 1991, Urabá fue declarada zona de libre comercio, lo cual eliminó todo control estatal sobre las rentas, los precios de los alimentos, la energía y las tarifas telefónicas. Las rentas se cuadruplicaron y los costos por energía y teléfono se convirtieron en los más altos del país.

A mediados de los años 90, incluso los cultivadores bananeros criticaban la ausencia de apoyo estatal para la región. Ello se debió, en parte, a que se les pedía que

garantizaran los servicios sociales que el Estado no creaba. «Denunciaban la ausencia estatal en la zona, la baja capacidad de gestión de los municipios, la falta de servicios públicos y el aumento de las invasiones». En suma, un alerta porque «un deterioro en la región de Urabá [...] dificulta los procesos de paz que se están intentando con los diferentes grupos armados».⁷

Sin embargo, el Estado no estaba completamente ausente: se hacía omnipresente a través de su ejército. En 1976, el gobierno nacional impuso alcaldes militares en los cuatro municipios principales de la región. Varios batallones emplazados en la región han mantenido una fuerte militarización aún después de que el poder civil fuera nuevamente instalado en los municipios en 1986.

La llegada de las guerrillas

Aunque existían guerrillas en la región, los observadores concuerdan en que antes de 1980 su presencia era muy pequeña, quizás unos treinta o cuarenta hombres en armas, divididos entre los tres frentes de las FARC. El EPL prácticamente no existía en 1979.⁸ Sin embargo, en los años 80, las luchas laborales se convirtieron en un espacio para el crecimiento del activismo guerrillero.

Mientras las FARC y el EPL fortalecieron sus relaciones con Sintrabanano y Sintagro, respectivamente, durante la primera mitad de los 80, sus alianzas agudizaron las divisiones entre los dos sindicatos. A mediados de la década, un proceso de paz a nivel nacional alteró el terreno. Las negociaciones entre las FARC y el entonces presidente, Belisario Betancur (1982-1986), condujeron a un acuerdo, en mayo de 1984, que permitiría abrir las estructuras políticas del país a la izquierda, invitando a sus sectores armados a desmovilizarse. El acuerdo permitió las elecciones directas de los alcaldes de Colombia y ofreció amnistía a los miembros de las FARC que accedieran a la desmovilización. De este acuerdo surgió, en noviembre de 1985, la Unión Patriótica, un nuevo partido de izquierda no armado que, pese a las crecientes presiones militares, participó en las elecciones desde mediados de los años 80 hasta mediados de los 90. En agosto de 1984, el gobierno firmó un acuerdo similar con el EPL, pero en Urabá la respuesta de la derecha a estos acontecimientos desvió el proceso, y quizás abrió el camino hacia la paramilitarización de todo el país.

Al principio, parecía que el proceso de paz tendría efecto positivo para los sindicatos. A fines de 1984 se produjo la primera gran huelga de la industria en la zona bananera —1 500 trabajadores en dieciocho plantaciones— y el primer acuerdo conjunto entre la asociación de compañías bananeras, Augura, y los

Bajo circunstancias extraordinariamente adversas, los trabajadores colombianos han atravesado las fronteras y buscado los puntos débiles del sistema. A pesar de la represión y las pérdidas, han encontrado la forma de organizarse. Sin embargo, han sufrido una violencia espantosa y se han visto forzados a integrar alianzas incómodas y peligrosas para sobrevivir.

sindicatos. «La tregua entre el gobierno y las guerrillas permitió a los sindicatos operar públicamente por primera vez», y Sintagro y Sintrabanano registraron un crecimiento astronómico. En 1985 se firmaron 127 contratos, que cubrían 60% de los trabajadores de la industria; es decir, un total de 4 000. Pero el proceso también provocó más violencia contra los sindicatos. En ese año se produjo el primer ataque con bomba contra las oficinas de Sintagro y el asesinato de Oscar William Calvo, vocero del EPL, lo cual puso fin a la participación de este en el cese al fuego.

La apertura política contribuyó también a lo que algunos llamaron una «guerra sindical», que aumentó a mediados de 1985. Los dos grupos guerrilleros compitieron por la fidelidad de los trabajadores y el control territorial creando «las fincas del EPL» y «las fincas de las FARC». Los propietarios se sirvieron de estas divisiones al «convenir pactos con un sindicato en desmedro del otro y sacar ventaja de ello, avivando aún más el conflicto».

Con la influencia del EPL, Sintagro representaba, a todas luces, a la mayoría de los trabajadores sindicalizados; pero Unión Patriótica, vinculada al Partido Comunista, disfrutaba de un éxito político extraordinario. El EPL acusó a las FARC de una serie de asesinatos de miembros de Sintagro, y de emplear la violencia para tratar de establecer su influencia política en el movimiento sindical. Las FARC acusaron al EPL de rigidez ideológica y de negativa a participar en la apertura política o el diálogo; este ripostó que, con sus alegaciones, las FARC estaban incitando a la violencia oficial contra su organización. Junto con el proceso de paz, la organización Muerte a los Revolucionarios del Nordeste (MRN), de Fidel Castaño, apareció en el nordeste de Antioquia y en Urabá en 1986, y sus amenazas y asesinatos de líderes de UP comenzaron de manera formal.

Sintagro y Sintrabanano se afiliaron a la nueva federación sindical nacional, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), cuando esta fue fundada en 1986.⁹ Pero en este mismo año se produjo el remplazo del presidente conservador Betancur por el liberal Virgilio Barco, quien puso fin al proceso de

paz con las guerrillas y al inestable cese al fuego con las FARC. Si el proceso de paz había conducido a un aumento de los niveles de violencia por parte de la derecha recalcitrante y sus paramilitares, que se oponían a las iniciativas de Betancur, este fin los incrementó aún más. El ejército estableció una jefatura militar en Urabá en 1987, en la cual el comandante militar reunía no solo poderes militares, sino también políticos y civiles. Ese mismo año, de febrero a abril, veinticuatro líderes sindicales fueron asesinados durante negociaciones entre Sintagro, Sintrabanano y la asociación de cultivadores. Las oficinas de Sintagro fueron destruidas por segunda vez con una bomba. En septiembre, otros dieciséis sindicalistas fueron asesinados. A fines de 1987, la mayor parte de los fundadores de Sintagro y Sintrabanano habían sido muertos.

No obstante, los acuerdos de abril de 1987 fueron un hito en las relaciones laborales en Urabá. El Ministro del Trabajo aceptó servir de mediador y logró un acuerdo firmado entre la asociación de cultivadores y Sintagro y Sintrabanano, que cubría a muchos más trabajadores —6 730 representados por Sintagro y 1 685 por Sintrabanano. De manera que 85% de los trabajadores eran miembros de un sindicato, y 87% de las 20 400 hectáreas de fincas bananeras estaban cubiertas por un pacto colectivo. Los acuerdos propiciaron avances importantes en los derechos de los peones, incluyendo la jornada laboral de ocho horas, el aumento de los salarios, el desmantelamiento del sistema de barracas de la compañía y el financiamiento para las viviendas urbanas de los trabajadores.

En 1987, el ala política del EPL y UP llegaron a un acuerdo en Urabá, lo cual contribuyó a que Sintagro y Sintrabanano se fusionaran en Sintrainagro, en 1988. El contexto nacional, donde sindicatos de varias tendencias se unieron para formar la CUT en 1986, favoreció este proceso en Urabá. El nuevo Sintrainagro, representando a unos 14 000 trabajadores bananeros, se afilió a la CUT.

Emergió un proceso contradictorio en el que el sindicato lograba firmar convenios colectivos beneficiosos, mientras la violencia contra los sindicalistas

umentaba. Ante la desmovilización de las guerrillas y el incremento de la fuerza y la unidad entre los sindicatos, surgió una alianza estratégica entre los terratenientes, el ejército y los paramilitares para tratar de que los sectores disidentes de la izquierda y las guerrillas intentaran alentar las divisiones y el derramamiento de sangre. Un ejemplo fue la masacre en las fincas Honduras y La Negra, en 1988, descrita al inicio de este artículo. En una espantosa y trágica prefiguración de los sucesos que ocurrirían en los años siguientes, los desertores del EPL colaboraron con los paramilitares en esos ataques.

Al acercarse la nueva época de negociaciones, en 1989, las diferentes facciones de Sintrainagro trabajaron de conjunto en la preparación de una propuesta de negociación. Cuando comenzaron las negociaciones en septiembre, dos sindicalistas —uno de ellos miembro del comité negociador— fueron baleados. A fines de octubre, un miembro del Partido Comunista y de la junta directiva de Sintrainagro, y otro del comité de negociaciones y líder de Unión Patriótica, fueron ultimados en Apartadó.¹⁰ 14 000 trabajadores iniciaron una huelga el primero de noviembre, junto a otra de carácter cívico, de dos días de duración, convocada por una «coalición de amplia representación política, campesina y sindical» en Urabá para exigir una investigación del número extraordinariamente elevado de asesinatos en el área.¹¹ El primer día de la huelga fueron asesinados tres trabajadores y el administrador de una finca. Aunque el propósito inicial de la huelga era protestar contra eso, continuó durante todo el mes de noviembre ya que Augura, la asociación de cultivadores bananeros, rechazó plegarse a la petición del sindicato de un aumento de 30% de su salario mensual, de 165 pesos.

A fines de mes un reportero encontró la región bajo fuerte control militar y a muchos huelguistas viviendo en un campamento provisional en el centro de Apartadó, hacia donde habían huido para escapar del asedio oficial en las plantaciones. La huelga terminó a inicios de diciembre, con un acuerdo que garantizaba 29% de incremento salarial durante el primer año y 27% para el siguiente, el reconocimiento de los acuerdos firmados previamente con Sintagro y Sintrabanano, y la atención al problema de la vivienda.¹²

La coincidencia de la serie de logros sindicales con el aumento de la violencia en contra de los sindicatos, a finales de los años 80, puede parecer paradójica. Sin embargo, en el contexto colombiano, tiene una lógica clara. Los acuerdos de paz y el fortalecimiento de la izquierda no armada en el campo político provocaron una respuesta feroz por parte de la derecha armada en todo el país. En ninguna parte fue esta respuesta tan violenta como en Urabá, donde los paramilitares tenían raíces profundas y donde los empresarios —tanto

extranjeros como domésticos— estaban acostumbrados a ejercer una autoridad incontestada sobre sus trabajadores. Fueron los mismos éxitos de organizaciones sindicales no-violentas los que impulsaron la violencia empresarial paramilitar a finales de los años 80.

La desmovilización del EPL, el nuevo sindicalismo sociopolítico, y el paramilitarismo

Entre 1992 y 1993, el EPL experimentó un giro radical hacia la derecha, y a la vez logró transformar a Sintrainagro. ¿Cómo fue posible que uno de los sindicatos más asociados con la izquierda en Colombia se convirtiera en socio de la industria bananera y de los paramilitares? Una explicación posible sería que la victoria militar de la derecha en Urabá le permitió tomar control del sindicato. Pero dado el carácter global de la industria bananera, los eventos en Urabá estaban entrelazados con eventos a nivel mundial también, y revelaron cómo la carrera hacia el enriquecimiento en la industria bananera, y los intentos de varios actores de enfrentar esa espiral, tuvo efectos irremediables y a veces inesperados a través del planeta.

A pesar de que el baño de sangre contra Unión Patriótica haya sido más conocido, el EPL, grupo mucho más pequeño y cuya presencia se concentró en la región de Urabá, fue, en muchos sentidos, más devastado por la violencia de los años 80. Los grupos de derechos humanos concluyeron que, para 1990, el EPL había sido casi diezmado por el ejército y los paramilitares, y por divisiones internas.

La constante violencia contra el sindicato y contra los desmovilizados de las FARC y del EPL tuvo efectos importantes en la reorientación de las tres organizaciones. El sindicato perdió muchos dirigentes activos y radicales, además de muchos miembros. Con los acuerdos de paz de 1984, muchos de los militantes más optimistas e idealistas de las FARC se desmovilizaron y se unieron a Unión Patriótica —y muchos de ellos fueron asesinados. Este proceso dejó a las FARC en manos de los que difícilmente no imaginaron otra solución que no fuera la militar. Lo que quedó del EPL se dividió irrevocablemente. Algunos de sus dirigentes concluyeron que la supervivencia radicaba en un acercamiento con la extrema derecha, mientras que otros —los «disidentes»— se unieron con elementos de las FARC, que progresivamente llegaron a ver a la lucha armada como un fin en sí. Parecía que la campaña de la facción de la derecha de asesinatos y terror había logrado eliminar a la derecha pacífica, dentro y fuera del sindicato. Quedaron dos grupos guerrilleros con sus alas políticas destruidas, y un

sindicato y un partido político en manos de los que vieron la colaboración con la extrema derecha como la única opción viable.

Encima de su estrategia militar, Augura se aprovechó de la trayectoria del comercio internacional del banano para empujar a Sintrainagro hacia posiciones más conciliatorias. Anticipando un crecimiento en los mercados europeos, con la caída de la Unión Soviética, en 1991, las multinacionales bananeras aumentaron su producción, pero los anticipados mercados de Europa del Este no se materializaron, y los precios cayeron dramáticamente. En 1993, se produce la «crisis bananera» cuando la producción en Colombia excedió ampliamente la demanda, en parte debido a la decisión de la Comunidad Europea de favorecer a sus ex colonias y reducir el número de bananos comprados en el mercado libre. La disminución en las exportaciones afectó a toda la sociedad de Urabá: 30% de los negocios locales fueron cerrados, el desempleo se disparó, y el alcalde de Turbo señaló que el número de vendedores ambulantes en la ciudad pareció duplicarse de la noche a la mañana.

Mientras, Augura declaró pérdidas por 80 millones de dólares en 1992, y alegó incapacidad para cumplir con los aumentos salariales prometidos. La asociación enfatizó el interés común que tenían los trabajadores y los dueños en proteger el lugar de Colombia en el comercio internacional del banano. El presidente ofreció mandar a representantes de Sintrainagro a hacer una gira por Europa para intentar que sus gobiernos prestaran condiciones arancelarias más favorables a las importaciones colombianas. ¿Sería posible la colaboración entre trabajadores y gerentes frente a la carrera hacia el enriquecimiento?

Algunos dirigentes del EPL creyeron que tal colaboración no solo era posible, sino imprescindible. Propusieron que el cambio radical de la dirección podría salvar a su organización y al sindicato. A pesar de —¿o debido a?— la autoría probada de los paramilitares de Carlos Castaño de la violencia contra los sindicatos, así como de las masacres de Honduras/La Negra, algunos líderes del EPL, incluyendo a Mario Agudelo, llegaron a creer que un acuerdo con los empresarios y los paramilitares era la mejor promesa de paz para lograr sus objetivos en la región.

Según Agudelo,

fue cuando planteamos la consigna de la salvación de la región y la defensa de la producción bananera. Pensamos que esas banderas podían distensionar a los empresarios, volverlos a cercar. Distensionar los factores del conflicto, incluso con la derecha, con Fidel Castaño. Planteamos la necesidad de una tregua unilateral [...] Por primera vez planteamos la posibilidad de aliarnos con empresarios bananeros.¹³

En 1991, 2 100 miembros (592 en Urabá) aceptaron una amnistía propuesta por el gobierno y apoyada por Fidel Castaño y los paramilitares, quienes acordaron entregar también sus armas y donar tierras, dinero y ganado a los cientos de guerrilleros desmovilizados. (La desmovilización paramilitar duró poco: los hermanos Castaño rehicieron pronto su ejército).

Los guerrilleros desmovilizados del EPL formaron un nuevo partido con las mismas iniciales, Esperanza, Paz y Libertad. En mayo de 1991, firmaron un acuerdo con Sintrainagro y Augura «para trabajar de conjunto en aras de crear un “pacto social”, que describen como el punto de comienzo para el “desarrollo integral”» de la región. El pacto fue firmado por «los sectores económicos y gremiales con asiento en el Urabá antioqueño, quienes comprometidos con los fines que persiguen, vinculan capital y trabajo para adelantar el proyecto de paz y desarrollo».¹⁴ La industria bananera acordó, además, aportar 23 millones de pesos a un Fondo de Paz para facilitar el proceso de reinserción.

Agudelo describió el pacto social como

el primer paso para vincular a toda la sociedad al proceso [...] Se trataba, ante todo y por encima de los intereses particulares, de fortalecer un proceso de convivencia democrática en la zona [...] Logramos con el gremio bananero una respuesta positiva. Se generó un ambiente distinto en las relaciones obrero-patronales y podemos decir que el tratamiento de los problemas a ese nivel, ya no tuvo las características del pasado.

Esperanza identificó su nueva posición como «sindicalismo sociopolítico».¹⁵ Para principios de 1994, este enfoque se convirtió en la línea dominante en el sindicato. El Consejero presidencial para la paz en Urabá anunció, a comienzos de 1994, que «las relaciones obrero-patronales no son en la actualidad fuente primordial de violencia como lo fueron entre los años de 1987 al 89. Este tipo de violencia parece ahora superada».

Algunos trabajadores tenían sus dudas sobre el nuevo convenio entre su sindicato y los paramilitares y Augura. En una investigación en 1993, la Comisión Andina notó una honda división entre los pocos sobrevivientes de la izquierda, que creyeron todavía que el sindicato debía enfocarse en mejorar las condiciones del trabajo, y los del EPL, que pensaban que el sindicato debía minimizar sus demandas dada la crisis económica que enfrentaban los empresarios y la amenaza de los precios de banano más bajos en otros países.

Si bien las relaciones de Esperanza con el gremio bananero y los paramilitares se suavizaron, con las FARC y el partido comunista, en cambio, empeoraron. Las FARC, el PC y UP rechazaron el pacto social, acusando a la dirigencia del EPL de «renunciar a la lucha de clases y de entregar los intereses de los trabajadores».

A comienzos de los años 90, «el deslinde entre la izquierda que defiende los postulados tradicionales y quienes han adoptado el cambio hacia una política de concertación y acuerdo nacional, se hizo bien claro», escribieron dos analistas del EPL.

La violencia por parte de la derecha tampoco disminuyó. Los paramilitares contribuyeron al esfuerzo de alentar el giro de Esperanza hacia la derecha. Su campaña de violencia sistemática se concentró en los miembros desarmados más radicales de la organización. Sindicalistas y otros militantes ofrecieron testimonio a la Comisión Andina de que la mayor parte de los activistas de Esperanza, Paz y Libertad que fueron asesinados eran miembros declarados de los comités sindicales de negociaciones. Igual que en los años 80, la violencia de la derecha se dirigió sobre todo en contra de la oposición civil desarmada, y no contra la guerrilla.

Debido a que facciones de ambos grupos guerrilleros permanecieron en la lucha armada, la derecha los culpó públicamente por muchos de los ataques contra los sindicalistas. Pero el aumento dramático de la violencia anti-sindical que acompañó a la toma de poder de los paramilitares en la región pone en duda esa explicación. La división del EPL creó otro espacio para la acción paramilitar, permitiéndole «asesinar a los sindicalistas más radicales que le causaban los mayores problemas» y culpar a otros actores armados por las muertes. A pesar de que en muchos casos nunca se esclareció la autoría de esos crímenes, la identidad política de las víctimas era clara: fueron los miembros más abiertos de la izquierda dentro de Sintrainagro y del EPL.

Entre los miembros del EPL que se desmovilizaron, muchos decidieron simplemente rechazar a sus antiguos dirigentes y retirarse de la nueva encarnación de su organización y su alianza con la derecha. Un estudio sobre el proceso resalta con sorpresa «el total descrédito de los excombatientes hacia todo lo que esté relacionado con su propio movimiento político».

El débil compromiso del gobierno con el proceso de reinserción y los ataques perpetrados por los guerrilleros que permanecieron armados, llevó a los miembros reinsertados del EPL a formar su propia organización de autodefensa, los Comandos Populares. En 1995, operaban en toda la zona bananera. A pesar de las protestas de Agudelo, las organizaciones de derechos humanos detectaron poca diferencia entre este nuevo grupo armado y los paramilitares. La autodefensa puede haber sido su objetivo inicial, pero pronto se convirtió en una justificación de los paramilitares, que atacaron a dirigentes sindicales y militantes políticos desarmados de la izquierda, especialmente en las plantaciones donde el Partido Comunista y Unión Patriótica tenían bases.

La Comisión Andina también recogió muchas acusaciones de que los Comandos «han operado como una forma de organización paramilitar, ya que han sido armados y auspiciados por el ejército y la policía nacional». La Comisión Verificadora detectó vínculos evidentes entre los Comandos, los propietarios de las plantaciones y el DAS. Algunas plantaciones parecían mantener en sus nóminas a miembros de los Comandos que no eran trabajadores.

Un sindicato dividido

La consolidación del «pacto social» no pareció ayudar a disminuir la violencia contra el sindicato y los trabajadores. Esto podría parecer inexplicable: organizaciones de izquierda y grupos guerrilleros de izquierda matándose entre sí y asesinando a trabajadores sindicalizados. Esta interpretación, sin embargo, hace caso omiso de varios elementos cruciales: la imposición violenta del control paramilitar, la purga de la izquierda en el EPL y en Sintrainagro, y el acercamiento de los últimos con Augura.

A principios de 1995, las Autodefensas tomaron definitivamente toda la zona bananera. Aunque había existido actividad paramilitar en Urabá desde mediados de los años 80, fue en 1993 cuando se convirtieron en una presencia permanente y controladora en los municipios del norte de Urabá, y en 1995 hicieron lo mismo en los municipios bananeros. El nivel de violencia y el desplazamiento se incrementaron bruscamente a fines de 1994 y hasta comienzos de 1995, y provocaron un verdadero éxodo —más de 20 000 personas entre noviembre de 1994 y mayo de 1995.

La asociación de cultivadores de banana parece estar muy implicada en la llegada de los paramilitares a Urabá. Oficiales de Banadex —filial de United Fruit en Colombia— se reunieron con el dirigente paramilitar Carlos Castaño en 1997 y acordaron pagar una cuota mensual que llegó a ser de más de dos millones de dólares en total, antes de que la compañía vendiera su filial colombiana, en 2004. Una de las razones para esta venta fue porque la compañía temía ser procesada después de que el gobierno de los Estados Unidos señaló a los paramilitares como organización terrorista.

Hubo centenares de muertos después de la toma paramilitar de Turbo, Carepa, Apartadó, y otras ciudades en la región bananera. Tanto la policía como el ejército colaboraron abiertamente con los paramilitares. El DAS, que ahora incorporaba a muchos reinsertados del EPL, colaboraba estrechamente con los Comandos Populares afiliados con Esperanza.

Tanto las FARC como la alianza paramilitares/EPL contribuyeron a la matanza, pero su participación no fue proporcional. El resultado fue también desproporcionado: al final de los 90, los grupos de autodefensa controlaban casi totalmente Urabá. Los izquierdistas fueron sistemáticamente purgados, asesinados y desplazados de Sintrainagro y de la región.

La transformación del sindicato y del panorama político local ocurrió en el contexto de la toma paramilitar y de la insistencia de la industria bananera en la unidad regional para apoyar su posición frente a la competencia internacional. Eventos posteriores confirmaron el carácter interrelacionado de estos acontecimientos.

En junio de 1997, los «esperanzados» exigieron que la alcaldesa independiente de Apartadó, Gloria Cuartas, dimitiera. Explicaron su posición como una necesaria defensa de la industria bananera de que dependía la región, y argumentaron que la oposición de la alcaldesa al control militar y paramilitar constituía una amenaza contra la industria, «ponía en peligro la presencia de Colombia en el mercado internacional del banano». Sintrainagro se unió a una «marcha pacífica» convocada por el ejército. Los empresarios dieron el día libre a los trabajadores y garantizaron el transporte hacia el estadio de Apartadó para la ocasión. Los Comandos Populares también «invitaron» a los trabajadores a asistir. Allí los líderes de Sintrainagro —ahora con una mayoría del EPL— se unieron a Augura, a Esperanza y a los partidos tradicionales, para pedir la renuncia de Gloria Cuartas y el apoyo de los militares. En 1998, el general del ejército Rito Alejo del Río fue retirado de Urabá —y luego obligado a jubilarse en 1999— debido a sus vínculos con los paramilitares. El presidente de Sintrainagro, Guillermo Rivera, participó como orador exclusivo en un evento organizado en su honor por Augura, en el moderno Hotel Tequendama de Bogotá, en mayo de 1999.

El contrato de dos años de duración firmado en mayo de 2002 —después de una huelga de un día de Sintrainagro— incluyó primas, contribuciones por parte de la compañía para un fondo para viviendas y otro para la educación, que debían ser administrados por representantes del sindicato y de Augura. Oswaldo Cuadrado Simanca, presidente de Sintrainagro, enfatizó en «la armonía y la buena voluntad en que tuvieron lugar las negociaciones, y declaró que el acuerdo benefició a ambas partes». Como explicó en 2004 Hernán Correa, secretario general de Sintrainagro, «entendimos que el patrón no es un enemigo, sino un socio».

La profunda división entre Sintrainagro y sus aliados, por una parte, y la izquierda colombiana, por

otra —incluyendo a la mayoría del movimiento sindical— se hizo notoria en la posición del sindicato en el contorno nacional. Cuando el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez visitó Urabá en 2002, Mario Agudelo elogió «sus aportes a la pacificación de Antioquia» cuando fue gobernador. En septiembre de 2003, cuando el presidente Uribe presentó a los electores colombianos un referéndum respaldando su paquete de medidas económico-neoliberal, la CUT y la izquierda hicieron una campaña activa en contra, mientras que Sintrainagro apoyó a Uribe. Oswaldo Cuadrado Simanca, presidente de Sintrainagro, compareció en la agencia de noticias presidencial el 25 de septiembre para divulgar la declaración de su sindicato. (El referéndum no fue aprobado).

Evaluando el nuevo Sintrainagro

Bajo circunstancias extraordinariamente adversas, los trabajadores colombianos han atravesado las fronteras y buscado los puntos débiles del sistema. A pesar de la represión y las pérdidas, han encontrado la forma de organizarse. Sin embargo, han sufrido una violencia espantosa y se han visto forzados a integrar alianzas incómodas y peligrosas para sobrevivir.

Para los sindicatos mundiales que han decidido enfrentarse a los desafíos de los intereses capitalistas y la represión de sindicatos a nivel global, y que ven en esta represión parte de una estrategia empresarial de aumentar las ganancias a través de la búsqueda —o la creación— de nuevas fuentes de trabajo siempre más baratas, Colombia, con el nivel de violencia contra sindicatos más alto del mundo, constituye un sitio obvio para empezar. Tampoco es sorprendente que los sindicatos extranjeros sean reacios a involucrarse en disputas internas del movimiento sindical colombiano.

Pero los miembros de una delegación sindical canadiense que visitó Urabá en 1997 quedaron «profundamente perturbados» por la situación en el área. Notaron un contraste significativo entre Sintrainagro y el resto del movimiento sindical colombiano, así como entre Sintrainagro y las otras organizaciones sociales de la región. En toda Colombia, los sindicatos se encontraron sitiados por los grupos paramilitares: «presenciamos una determinación increíble por llevar adelante la lucha contra fuerzas superiores prácticamente invencibles». En Urabá, Sintrainagro se encontraba alienada de los tradicionales aliados de los sindicatos. Todas las tendencias políticas —menos la del EPL— habían sido eliminadas del sindicato. Mientras en el pasado los líderes de Sintrainagro reflejaban las múltiples tendencias políticas

de la región, en 1997 los líderes incluyen solamente a militantes del partido del EPL.

Los dirigentes sindicales expresaron su desacuerdo con las organizaciones de paz y de derechos humanos en el área, y su apoyo a los grupos paramilitares. «Nunca reconocieron los abusos cometidos por los militares en la región, ni los vínculos entre el ejército y las fuerzas paramilitares, que han sido bien fundamentados por las organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales», informaron los canadienses. El comandante del ejército en Urabá, general Rito Alejo del Río, solo tenía palabras de encomio, describiendo al sindicato como «el modelo de modelos». Los canadienses llegaron a la conclusión de que

hay cientos de ex miembros de este sindicato desplazados en otras regiones del país que, sin dudas, tendrían una historia muy diferente que contar respecto a los líderes que actualmente dirigen Sintrainagro. En nuestra opinión, sus testimonios deben formar parte de la valoración final del papel que este sindicato está desempeñando en la actualidad en la región de Urabá.¹⁶

El alto nivel de violencia ha desempeñado un papel claro en forzar a los trabajadores bananeros a formar las alianzas contradictorias de las tres últimas décadas. Mauricio Romero explica que

es más probable que antes [los trabajadores bananeros] no fueran tan revolucionarios como aseguraban las autoridades en sus acusaciones, y que hoy no sean tan reaccionarios como sus adversarios alegan. Más bien han tenido que adaptarse según los cambios en el mundo de relaciones en que han tenido que actuar.¹⁷

No obstante, puede que Romero exagere cuando sugiere que «los revolucionarios de la década pasada [han] optado hoy por la ciudadanía».¹⁸ Como señala la delegación sindical canadiense, los revolucionarios de la década pasada tal vez han sido asesinados y desplazados, remplazados por una dirigencia sindical muy distinta a la anterior.

El caso de los sindicatos de Urabá sugiere varias conclusiones preocupantes sobre las posibilidades que existen para los sindicatos bajo un régimen de globalización neoliberal. Primero, a pesar de que la coyuntura histórica llevó a que los gobiernos y los empresarios ampliaran los derechos de los trabajadores a mediados del siglo xx en América Latina (como en otras partes del mundo), por lo menos en algunos sectores —sobre todo urbanos e industriales—, las estrategias empresariales más viejas para controlar la fuerza de trabajo, incluyendo la violencia directa, se reanimaron y expandieron a finales del siglo. Las tácticas que frecuentemente se asocian con la globalización contemporánea, como el aumento del poder de las corporaciones, la disminución del papel social del Estado, y la dispersión de los sitios de

producción para ejercer una presión hacia abajo en los salarios y las condiciones, pueden parecer nuevas en el sector industrial, pero han sido la norma en el agroexportador desde las épocas coloniales y neocoloniales.

Tampoco es una anomalía el caso de Urabá. Al contrario. Dentro de los corredores de poder corporativos y estatales, Urabá sugiere la ola del futuro, como reportó *The Houston Chronicle*,

Los excesos paramilitares en Urabá tuvieron implicaciones mucho más allá que las plantaciones bananeras. Según un informe reciente del gobierno colombiano, la estrategia y las tácticas de los paramilitares en Urabá sirvieron de *modus operandi* cuando los paramilitares extendieron su campaña contra-guerrilla a nuevas áreas de Colombia. «Se convirtió en un modelo nacional que muchos aplaudieron» según León Valencia, un analista político en Bogotá.¹⁸

Los Estados Unidos consideran al presidente colombiano Álvaro Uribe su aliado regional más fiel, y siguen derramando recursos en el ejército colombiano, y han declarado que Colombia ofrece un «buen modelo» para los esfuerzos estadounidenses en otras partes del mundo.

La combinación de una represión extraordinaria contra la izquierda, y la súplica de parte de los empresarios para la colaboración por la salvación regional, crearon el contexto para la transformación de uno de los sindicatos colombianos más radicales a un aliado de la derecha.

Mientras muchos de los trabajadores del mundo están apenas empezando a reconocer y enfrentarse con los desafíos de la globalización neoliberal, los bananeros llevan más de un siglo enfrentándose con sus precursores. El espectro de respuestas que las compañías bananeras han utilizado para aumentar sus ganancias a expensas de los derechos laborales y humanos puede volverse más característico que excepcional mientras se consolide el orden global neoliberal. La experiencia de los bananeros colombianos y sus sindicatos sugiere conclusiones bastante pesimistas sobre el futuro de los trabajadores bajo la globalización neoliberal.

Traducción: Ariel Rojas Rivero.

Notas

1. Tod Robberson, «Paramilitary Groups Gaining Strength in Colombia», *Dallas Morning News*, Dallas, 13 de julio de 1997.
2. *La violencia* se refiere a una década sangrienta que va desde los años 40 hasta mediados de los 50 en Colombia.
3. Mary Roldán, *Blood and Fire: La Violencia in Antioquia, Colombia, 1946-1953*, Duke University Press, Durham, 2002, p. 226.

4. Fernando Botero Herrera y Diego Sierra Botero, *El mercado de fuerza de trabajo en la zona bananera de Urabá*, Universidad de Antioquia, Medellín, 1981, p. 81.
5. Luis Asdrúbal Jiménez Vaca, «Comunicación No. 859/1999» al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Ginebra, <http://www.acnur.org/pais/docs/142.pdf>.
6. Comisión Andina de Juristas/Seccional Colombia, *Informes regionales de derechos humanos: Urabá*, Comisión Andina de Juristas, Bogotá, 1994, p. 39. Marbel Sandoval (*Gloria Cuartas: ¿por qué no tiene miedo?*, Planeta Colombiana Editorial, S.A., Bogotá, 1997) cita una tasa de evasión de impuestos de entre 50 y 60% en el período 1977-1981.
7. Marbel Sandoval, ob. cit., p. 183.
8. Fernando Botero Herrera y Diego Sierra Botero, ob. cit., pp. 144-6.
9. Medófilo Medina, «Violence and Economic Development: 1945-50 and 1985-88», en Charles Berquist, Ricardo Peñaranda y Gonzalo Sánchez, eds., *Violence in Colombia: The Contemporary Crisis in Historical Perspective*, Scholarly Resources, Wilmington, Delaware, 1992, p. 162.
10. United Press Internacional, «11 Die in Medellin Weekend Violence», 23 de octubre de 1989; «Colombia: Politics and Violence», *Latin America Weekly Report*, 16 de noviembre de 1989, pp. 45-89; Comisión Andina, ob. cit., p. 42.
11. «Banana Strike is Over», *Latin America Weekly Report*, 14 de diciembre de 1989, pp. 49-89; Comisión Andina, ob. cit., pp. 40-1.
12. «Banana Strike...», ob. cit.
13. Álvaro Villarraga Sarmiento y Nelso Roberto Plazas, *Para reconstruir los sueños*, Fundación Cultura Democrática, Bogotá, 1994, pp. 390-2.
14. William Ramírez Tobón, *Urabá: Los inciertos confines de una crisis*, Planeta, Bogotá, 1997, pp. 64-5.
15. Álvaro Villarraga Sarmiento y Nelso Roberto Plazas, ob. cit., pp. 393 y 458.
16. John Bird *et al.*, «Report of the Canadian Trade Union Delegation to Colombia», febrero de 1998, <http://www.colombiasupport.net/199802/canadaunion.html>.
17. Mauricio Romero, «Los trabajadores bananeros de Urabá: ¿de «súbditos a ciudadanos»?», <http://www.ces.fe.uc.pt/emancipa/research/pt/ft/uraba.html>.
18. Ídem.
19. John Otis, «Critics Question Chiquita's Claim that it Was Forced to Pay Colombian Paramilitaries», *The Houston Chronicle*, Houston, 2 de abril de 2007.